

## A propósito del Programa Jefes de Hogar

Por Aldo Neri

El programa de Jefes y Jefas de hogar desocupados iniciado por el gobierno puede constituir un avance hacia una superación de la antidemocrática dualidad entre "asistencia social" para pobres, por una parte, y "seguridad social" para trabajadores formales, por la otra. O también puede agotarse en un frustrante y conflictivo reparto de subsidios que, en la versión más optimista, emparchen apenas hambrunas críticas. En pro de que se afiance la primera alternativa, vale apuntar algunas consideraciones.

El programa debe inscribirse en el camino a un ingreso social básico familiar, sustentado en un concepto de derecho de ciudadanía, que alcanza a la totalidad de los habitantes de esta tierra, en el marco de una concepción universalista de la Seguridad Social.

Algunas acciones propias de ese camino exigen contraprestación por parte del beneficiario –son condicionales-, ya sean contraprestaciones educativas, sanitarias o laborales. Otras son incondicionales, por ejemplo la asignación de un pago por hijo, adicional al salario hasta hoy. En esta concepción, el programa para jefes de hogar desocupados con hijos menores constituye un claro ejemplo y una excelente iniciativa, entre las acciones del primer tipo, que exigen contraprestación.

Pero es precisamente esta índole la que le imprime una significativa complejidad adicional, que las acciones incondicionales no tienen. O sea, demanda un esfuerzo organizativo, de calidad y eficiencia de gestión y de transparencia, mucho mayor. Y la cosa tiende a complicarse si, en su implementación, se aspira a lograr gran cobertura en plazos breves. Sobre todo teniendo a la vista el agravante de que el Estado argentino ha alcanzado, en sus diferentes jurisdicciones, un tremendo nivel de deterioro operativo, por una parte, y por la otra, la existencia hoy de un grado de conflictividad social latente que, desatada, es capaz de pervertir el resultado de la mejor iniciativa.

Organizar en corto tiempo y gran escala, en los niveles locales del país, acciones educativas, de trabajo comunitario o de inserción en empresas productivas privadas, para los beneficiarios, conlleva un alto riesgo de frustración, que ya evidenciaran programas como el Trabajar. Y este es el riesgo concreto que se enfrenta en este momento. Otro resultado podría esperarse si la estrategia de expansión fuera gradual, con buena preparación del recurso humano y comunitario involucrado, selección cuidadosa de las áreas, y montaje de un eficaz sistema de seguimiento y evaluación.

Teniendo a la vista las restricciones y riesgos aludidos, así como la necesidad de acción efectiva y rápida que impone la crisis, hubiera resultado aconsejable producir inicialmente una universalización de las asignaciones familiares, que hoy cubren sólo a las familias en la economía formal, proyecto que, a través de un registro público de postulantes, puede implementarse en pocos meses con la estructura de la ANSES. No cabe duda que buena parte de lo que se aspira alcanzar con el programa para jefes de hogar tendría así un primer y rápido logro, compartido con sectores que se desenvuelven en la informalidad del trabajo más precario, en la práctica, imposibles de disociar de los desocupados.

El ritmo de implementación de tal proceso de universalización deberá ajustarse a la prioridad de edades a cubrir y a la disponibilidad de recursos con tal destino, pero siempre con el requisito de universalidad para cada grupo incluido en cada etapa, por ejemplo, menores de 10 o de 15 años, como etapas sucesivas.

Conjuntamente, debería avanzarse en la universalización de una pensión básica para los mayores de setenta años que carezcan de cobertura del sistema previsional o del no contributivo, con similares características de implementación. Ambas acciones tendrían, además, ya un carácter permanente e independiente de situaciones laborales.

Así, recorriendo estos tres carriles simultáneamente, pero con velocidades distintas, se estaría logrando el impacto social buscado, con mayor eficiencia y menor riesgo de costos sociales y políticos negativos. Y ello mediante la utilización de los recursos presupuestarios ya previstos, adecuadamente redistribuidos. Pienso que es todavía tiempo para una corrección de rumbo como la propuesta.

Por otra parte, desde hace años, se ha hablado hasta el cansancio de la dispersión ineficiente de programas sociales para los sectores más vulnerables, pero casi nada han hecho sucesivos gobiernos para revertirla. Es indispensable que el gobierno tome decisiones drásticas en tal sentido, integrando los recursos en la línea del ingreso social básico familiar que, a la par de servir para la coyuntura asistencial ineludible, se proyecta a futuro como un componente central de una nueva seguridad social. Esto quiere decir que hay programas que deben desaparecer y ser reformulada la estructura misma del área de gestión social del Estado, hoy igual o peor que antes.

Asimismo, dada la importancia crucial de las provincias y municipios en el desarrollo del programa para jefes de hogar, resulta necesario convenir la concurrencia de su trabajo social en este proyecto. Dicho de otro modo, no tendría sentido que el esfuerzo nacional sea meramente una acción superpuesta más, en paralelo con otras actividades sociales locales ineficientes y clientelares. Tales acuerdos deben ser explícitos y públicos, porque de ello depende, en gran medida, la reconstrucción de la confianza en la política social del estado, como un instrumento que no sirve a la mala política partidista, sino al interés de las mayorías.

Avanzar con este rumbo implicará, más allá de la llegada oportuna al corazón de las necesidades –apoyo inevitablemente magro en los tiempos que corren-, un replanteo del funcionamiento estatal, y sobre todo, afianzar una concepción universalista e integradora de nuestra sociedad. Ella entenderá que, entre la caridad, la manipulación y la justicia, se ha elegido la justicia.